La Magistratura en el mundo

Episodio 48. Del 21 al 27 de marzo

Alejandro Anaya: Los tribunales de la Unión Europea presentaron sus estadísticas judiciales del año 2024.

En España, el Tribunal Supremo condenó a un despacho de abogados por vulnerar la intimidad de una empleada cuyos datos estuvieron accesibles en una carpeta compartida.

¡¡Y atención!! Que en nuestra sección de Absurdos Jurídicos hablaré sobre “Pelear jurídicas... de peleas galleras”.

Qué tal, soy Alejandro Anaya, los saludo en este cuadragésimo octavo episodio de la Magistratura en el mundo, donde cada semana les presento la actividad más relevante registrada en los tribunales del planeta, y que, con detalle, pueden ustedes consultar en la página web de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en las redes sociales del Alto Tribunal. Dicho lo anterior, ¡vamos con más información!

En Francia, el Consejo de Estado emitió un dictamen sobre el proyecto de ley que propone medidas para combatir el narcotráfico.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con las Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, urgieron a los Estados Americanos a redoblar sus esfuerzos y fortalecer las acciones relacionadas a la memoria, verdad y justicia.

Entre las noticias más relevantes, destaca que en Japón, el Tribunal de Distrito de Shizuoka resolvió que se otorgue una compensación

de aproximadamente 217 millones de yenes a Iwao Hakamada, de 89 años, quien fue declarado inocente en un juicio de revisión por el asesinato de una familia en 1966. Se trata de la cifra más alta concedida en la historia de Japón bajo la Ley de Compensación Penal. El señor Hakamada pasó 47 años y siete meses bajo detención injusta antes de que su condena fuera revocada. En 1968, fue condenado a muerte por el asesinato de cuatro personas en la prefectura de Shizuoka, pero nuevas pruebas y fallos en la investigación llevaron a su liberación en 2014 y, finalmente, a su absolución en 2024.

Ahora pasemos a lo curioso, extraído de nuestro archivero...

Hoy comparto con ustedes algunas sentencias dadas en otros países, a propósito de las peleas de gallos. El primer ejemplo ocurrió en el año 2004 en Estados Unidos, cuando la Suprema Corte se rehusó a conocer la apelación interpuesta por defensores de peleas de gallos en Oklahoma. Ya en 2002, se había hecho un referéndum que había optado por la supresión de ese espectáculo. Esto fue confirmado por la Corte Suprema del estado. Según la legislación estatal, los organizadores de peleas de gallos pueden alcanzar penas de 10 años de prisión y multas de 25 mil dólares. Posteriormente, en diciembre de 2021, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, al resolver en contra de un empresario de Guam, ratificó la prohibición de llevar a cabo peleas de gallos en los territorios de Estados Unidos.

Otro caso ocurrió en 2010 en Nicaragua, cuando la Asamblea Nacional aprobó la creación del delito de “biocidio”, es decir la matanza injustificada de un animal doméstico o silvestre domesticado. No obstante, los beneficios para los gallos nicaragüenses deben ser tomados con reservas: si bien el artículo

33 de la Ley para la protección y el bienestar de los animales domésticos y animales silvestres domesticados prohíbe actividades como corridas de patos, “gallo tapado” u otros, cuyo fin sea causarles daños, lesiones o la muerte de los mismos, el artículo 34 desencanta al reconocer a las peleas de gallos como tradición cultural y costumbre nicaragüense, que sólo podrá realizarse en las galleras autorizadas. Otra mala noticia para los gallos es el inciso e) del artículo 53, al disponer que no se considerará mutilación el descreste de gallos de pelea. Ergo, en suelo nicaragüense, conviene más, para estas aves, ser “gallos tapados”, que “gallos de pelea”.

Finalmente, en 2019, en Puerto Rico, el juez federal Gustavo Gelpí falló en contra de la demanda presentada por el Club Gallístico de Puerto Rico y la Asociación Cultural y Deportiva del Gallo Fino de Pelea y mantuvo en vigor la prohibición de las peleas de gallos en la isla, según dispone una sección de la Ley de Mejoramiento de la Agricultura de 2018 y que enmienda la Ley de Protección de Animales de 1966. El juez rechazó los argumentos de los demandantes sobre que el Congreso excedió su autoridad para regular y legislar las peleas de gallos bajo las Cláusulas Territorial y de Comercio; que la ley viola la décima enmienda de la Constitución y sus derechos civiles, y que la ley no puede ser aplicada en Puerto Rico debido a las estipulaciones de la Ley de Relaciones Federales.

Me despido por hoy, soy Alejandro Anaya, nos escuchamos en nuestro próximo podcast. ¡Adiós!

Locutora 1: A Saber, la red sonora de La Corte, presentó...

Locutora 2: La Magistratura en el mundo.